

El mal de la corrupción

El Mensajero

Semana del 14 de agosto del 2005

El mal de la corrupción: también en el Área de la Bahía

Manuel Ortíz

Especial para El Mensajero

Escándalos de corrupción ponen al Área de la Bahía bajo la mira de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

[Para enviar tus comentarios ve al final de este artículo]

El reconocido periodista David Brooks ha insistido, tanto en su columna del The New York Times como en sus artículos del periódico mexicano La Jornada, en que los Estados Unidos deben poner más atención en la corrupción que existe dentro del país, antes de presentarse ante el mundo como “el principal exportador de la democracia y la legalidad”.

Y es que, como afirma Brooks, en los últimos años se han incrementado los casos (o acusaciones) de corrupción que han salido a relucir a la luz pública. Estos casos obedecen tanto al sector público como al privado: desde funcionarios públicos (como los ex alcaldes de San Diego y L.A.), políticos que aspiran al poder, empresarios, líderes religiosos, deportistas y hasta organizaciones sin fines de lucro de renombre como la Cruz Roja y los Boy Scouts. Ahora le tocó el turno al Área de la Bahía.

Caso individual

Agustine Fallay, director del Departamento de Construcción e Inspección de San Francisco, fue arrestado el jueves 4 de agosto acusado de soborno. El arresto fue el resultado de una investigación realizada entre la FBI y la oficina de la fiscal de distrito de San Francisco, a cargo de Kamala Harris.

Debbie Mesloh, vocera de la Fiscalía de Distrito, informó, en entrevista para El Mensajero, que Fallay enfrenta 10 casos de soborno y 3 de perjurio, mismos que fueron cometidos en los últimos 12 años. Una de las acusaciones obedece a un supuesto préstamo de 50 mil dólares que Fallay recibió en efectivo para agilizar proyectos de construcción. Además, se le acusa de haber recibido servicios para mejorar su propia casa a cambio de favoritismo.

Mesloh informó que la oficina de la fiscalía de distrito está tomando estrictas medidas para que no se repitan casos de corrupción. De igual forma, instó a que la comunidad denuncie los casos de corrupción o favoritismo por parte de funcionarios públicos, ya sea en el Departamento de Construcción o en cualquier otro de la ciudad, al teléfono: (415) 553-1030. Añadió: “Vamos a tomar muy en serio estos casos. Estos individuos serán perseguidos y consignados”.

También por mayoreo

Otro escándalo reciente de corrupción ocurrió en el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés). Una red compuesta por empleados de esta institución y personas externas que colaboraban con ellos, vendían licencias de manejar en diferentes puntos de California. El descubrimiento fue el resultado de una investigación de dos años por parte de la FBI.

En una oficina del DMV en Oakland, localizada en el 530 de la calle Claremont, el empleado Frances Aliganga (examinador de licencias y registros) recibía sobornos de Verónica Rivera, quien era el contacto afuera de la oficina. Ambos vendían licencias de conducir falsas a inmigrantes indocumentados. Estos documentos tenían un costo de entre 3 mil y 4 mil dólares.

Cuando Aliganga recibía la mitad de la cuota por un documento falso, procesaba la aplicación y le entregaba a Rivera licencias temporales de conducir, en lo que el comprador recibía por correo el documento definitivo. Algunas de las personas que recibieron la licencia, nunca hicieron examen escrito ni de conducir. Rivera salió libre al pagar una fianza de 500 mil dólares.

Aliganga le daba un porcentaje del dinero a la también empleada del DMV, Brachelle Fifer, quien se encargaba de insertar la información de las aplicaciones en el sistema de cómputo. Así, los compradores de licencias falsas quedaban registrados en el DMV como si hubiesen entregado toda la información requerida.

También en Oakland, los empleados del DMV Stephanie Dense Davis y Shahid Hamid fueron acusados de vender calcomanías de registro a propietarios de vehículos que no cumplían con los requisitos de la verificación de contaminación.

Aun sin comprobar

Otra acusación de corrupción es la que enfrenta el Presidente del Senado de California, Don Perata. A este reconocido político de Oakland, se le investiga por malversación de fondos en su campaña política. Perata no ha sido sentenciado. Él afirma que es inocente, mientras un jurado federal sigue con las indagatorias de su caso.

Envía tus comentarios acerca de este artículo: